

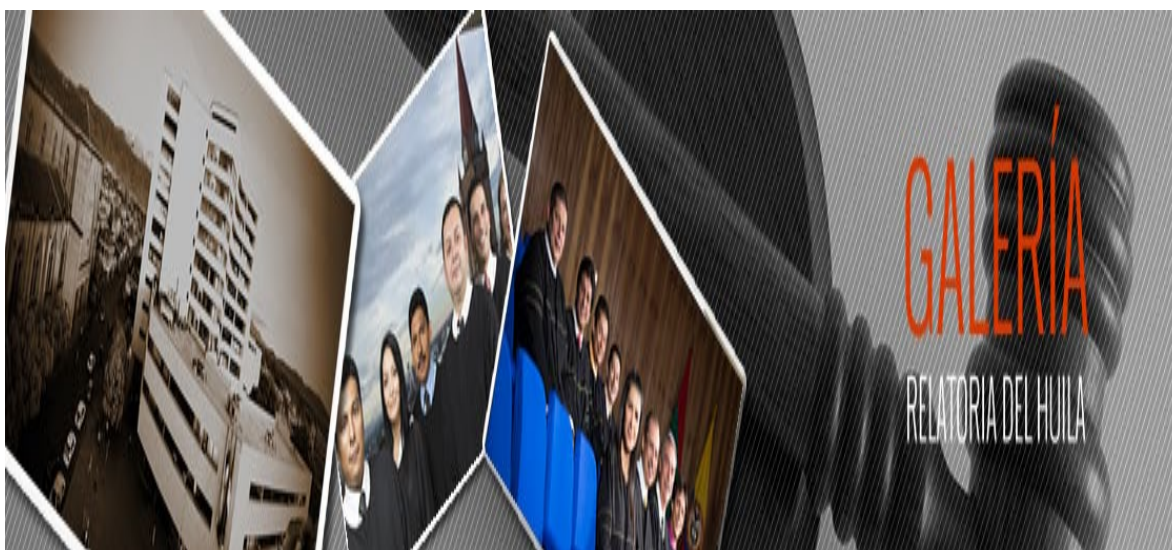


# **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA**

**BOLETÍN No. 2**

**FEBRERO**

**2021**



Tel. 8722638

Email: [relatoriatah@gmail.com](mailto:relatoriatah@gmail.com)  
[www.ramajudicialdelhuila.gov.co](http://www.ramajudicialdelhuila.gov.co)

# **MAGISTRADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA**

**BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS**  
**Presidenta**

**JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**Vicepresidente**

**GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA**  
**Magistrado**

**JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**Magistrado**

**RAMIRO APONTE PINO**  
**Magistrado**

**JOSÉ MILLER LUGO BARRERO**  
**Magistrado**

**ENRIQUE DUSSAN CABRERA**  
**Magistrado**

# RESEÑA HISTÓRICA

La Relatoría del Tribunal Administrativo del Huila fue creada mediante Acuerdo No. 2078, (Art. 2º) de Septiembre 24 de 2003, del Consejo Superior de la Judicatura.

## MISIÓN

Recopilar, titular y sistematizar la información jurídica suministrada por los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, para que pueda ser consultada oportunamente por los usuarios internos y externos.

## VISIÓN

Apoyar permanentemente en su misión a los administradores de justicia y a la comunidad en general, estando a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

## FUNCIONES DE LA RELATORÍA

Las funciones del Relator del Tribunal Administrativo del Huila están precisadas en el Acuerdo No. 01 del 6 de Abril de 2011 de la Corporación, en el artículo 7º, destacando en lo que hace referencia a este tema, las siguientes:

- Recopilar, analizar y titular el documento jurisprudencial.
- Procesar la información.
- Facilitar a los usuarios un adecuado acceso a la información jurisprudencial



**Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** JAIME PULIDO PARRA

**DEMANDADO:** DIAN

**RADICACIÓN:** 41 001 23 33 000 2015 00923-00

**FECHA:** FEBRERO 23 DE 2021

**LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN:** Violación debido proceso- Inadecuada apreciación ítems tributarios declaración contribuyente.

“44.-El Tribunal no comparte esa manera interpretativa de la DIAN, pues la información del contribuyente basada en documentos contables, que no han sido desconocidos ni tachados de falsos, ni desmentidos con otros medios probatorios resulta contraria a derecho por cuanto termina dándole valor probatorio suficiente al mayor valor de la información exógena, por el simple hecho de ser un mayor valor, que a la certidumbre de la información fundada que presenta el contribuyente y que se corresponde con su realidad contable y tributaria.

45.-Es que la información presentada por el tercero es una prueba testimonial como lo establece el artículo 7503 del E.T; y dado que el presente caso versa sobre adición de ingresos, es evidente que debe primar la prueba contable sobre la testimonial, como bien lo ha advertido el Consejo de Estado en su jurisprudencia del 10 de febrero de 2011, MP. William Giraldo Giraldo, expediente 16752:”  
(...)

49.-En cuanto a no realizarse la respectiva retención en la fuente a pagos originados en relaciones laborales, conforme al artículo 87-14 del E.T., y ante la argumentación de la parte actora de no tener la calidad de agente retenedor en atención a que no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 368-25 del E.T. ibídem., efectivamente la administración tributaria no demostró que estaba en esa obligación, limitándose a aplicar la primera norma mencionada sin la certeza de que el actor era aplicable esta última.

50.-Es que no existe argumentación o probanza de que el actor es agente retenedor y esa carga estaba en la administración tributaria demostrarla y no lo hizo.

51.-A lo anterior se adiciona que, en cuanto a que esos pagos laborales no constitutivos de salarios a los trabajadores particulares superaron el 40% del total de la remuneración (establecida en el artículo 30 de la ley 13936 de 2010, no los reconoce como deducciones, debería haberse realizado sobre los pagos efectuados con posterioridad a la vigencia de esta ley; esto es a partir del 12 de julio de 2010 y como se observa que alude a pagos con anterioridad a esta fecha, se violó el debido proceso al aplicar una norma que no estaba vigente cuando ocurrió el hecho que ahora es tributario.

52.-Por ende la argumentación del demandante tiene fundamento fáctico y jurídico, por lo que la Dian ha debido mantener o reconocer ese costo o deducción.”

**FUENTE FORMAL:** Estatuto Tributario.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Consejo de Estado en su jurisprudencia del 10 de febrero de 2011, MP. William Giraldo Giraldo, expediente 16752.



**Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** MARTHA GRILLO VARGAS

**DEMANDADO:** NACIÓN- MINEDUCACIÓN- FOMPREMA

**RADICACIÓN:** 41 001 23 33 000 2019 00553-00

**FECHA:** FEBRERO 23 DE 2021

## **RÉGIMEN CESANTÍAS DOCENTES SECTOR OFICIAL: Retroactividad.**

“33.-Lo anterior conlleva a que el artículo 15 numeral 3°, literal A., de la ley 91 de 1989, no hizo extensiva la retroactividad de las cesantías a los docentes nacionalizados nombrados a partir el 1° de enero de 1990; de haber sido así, no era necesario haber hecho la distinción entre los nacionalizados antes de diciembre 31 de 1989 y los vinculados a partir del 1° de enero de 1991.”  
(...)

“34.-La demandante Martha Grillo Vargas se vinculó al servicio público educativo mediante Decreto 1307 del 18 de octubre de 1991 (fs. 34) expedido por el Gobernador del Departamento del Huila. Tomó posesión del cargo el 1 de noviembre de 1991 (f. 35).

35.-Al haberse posesionado con posterioridad al 1° de enero de 1990, se le aplica el régimen especial que en materia de prestaciones sociales gozan los docentes, el cual está regulado en el artículo 15 de la ley 91 de 1989 y que de conformidad con su numeral 3° establece que tienen derecho al pago de cesantías las cuales serán liquidadas anualmente y sin retroactividad, de tal suerte que al quedar sometidas al régimen de cesantías anualizadas, no le asiste el derecho a la retroactividad de las mismas pues sólo se estableció para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989; de tal suerte que al no tener desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados, se negará la nulidad pedida y el restablecimiento consecuencial deprecado por la demandante.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 6 de 1945/ Ley 65 de 1946/ Ley 344 de 1996/ Decreto 1160 de 1947.

**NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento de Boyacá, de fecha 16 de julio de 2020. También puede ser consultada sentencia de enero 19 de 2015, Radicación: 73001-23-33-000-2012-00226-01(4400-13), CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren/ C-928 de 2006.



**DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** SOCIEDAD FERRECASTILLO S.A.S

**DEMANDADO:** DIAN

**RADICACIÓN:** 41-001-23-33-000-2019-00014-00

**FECHA:** FEBRERO 2 DE 2021

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Medios de prueba en materia Tributaria/ Sanción por inexactitud.**

“Advierte la Sala que la inconformidad de la sociedad demandante frente a las glosas establecidas por la DIAN en el acto de determinación del tributo, se sustenta en que la información exógena que fue reportada por terceros a la administración no fue corroborada ni confrontada con el material probatorio aportado por FERRECASTILLO S.A.S. y específicamente la contabilidad que le adujo y que tampoco se realizó visita a fin de comprobar su realidad económica.

Atendiendo el marco normativo y jurisprudencial expuesto en el acápite anterior, la determinación de tributos debe fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en las normas procedimentales generales, en cuanto estos sean compatibles con aquéllos; y si el soporte probatorio del contribuyente es su contabilidad, la misma debe cumplir los requisitos de suficiencia e idoneidad.

Igualmente, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, puede efectuar las diligencias que considere necesarias para la correcta determinación del impuesto, lo cual puede incluir inspecciones tributarias o contables, o el simple requerimiento o exhibición de los libros, comprobantes y documentos de contabilidad.

No obstante, al contribuyente le corresponde prestar toda su colaboración para lograr una determinación del impuesto conforme a su realidad económica, presentando todas las pruebas que acrediten la realidad de los hechos que soportan su declaración; y controvertir aquellas recaudadas por la administración al interior del procedimiento tributario a fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción en relación con los registros contables de la declaración cuestionada por la autoridad tributaria.

Descendiendo al caso concreto, la Sala considera que, en ejercicio de su facultad de fiscalización, la DIAN efectuó una comprobación de las operaciones realizadas por la sociedad contribuyente a partir de su contabilidad, en la que se encontraban, entre otros documentos, el libro de balance por terceros; pruebas incorporadas en virtud de los procesos de devolución de saldos a favor declarados en el denuncia rentístico de la vigencia 2016 y declaración IVA bimestre 6 de 2016; realizó cruce de información con terceros; y valoró la información requerida (folio 1047 a 1100) y aportada tanto por la demandante como por los agentes retenedores según la información exógena, medios probatorios establecidos en la ley tributaria y que permitieron a la administración de impuestos determinar con certeza la veracidad de la declaración privada discutida.

Para el caso de la sociedad FERRECASTILLO S.A.S., en la información exógena, la División de fiscalización de la DIAN encontró diferencias entre la contabilidad y lo informado por el contribuyente y los terceros. Una vez realizó

los cruces de información a través de los requerimientos realizados a estos últimos, advirtió que los valores reportados por el contribuyente no coincidían con lo registrado y certificado por aquellos.

El hecho de que la DIAN no hubiera realizado una inspección tributaria o contable a los libros de la sociedad en el lugar de su domicilio, no significa per se que la determinación del impuesto no se hubiera efectuado con base en los hechos probados en la actuación administrativa, conforme lo exige el artículo 742 del Estatuto Tributario.”

(...)

“En el presente caso la parte actora afirma que al tenor de lo dispuesto en el artículo 647 del E.T., la sanción por inexactitud es improcedente cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de

diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

La Sala advierte que en el proceso se acreditó que la demandante omitió declarar ingresos; omitió el registro de compras e incluyó en el denuncia de renta gastos y deducciones improcedentes, esto es, que no cumplen con los requisitos que exige el artículo 107 del E.T. o las pruebas aportadas no llevan al convencimiento de que los presupuestos que exige esa norma se cumplen.

Los medios de prueba relacionados, apreciados en su integridad, permiten llegar a conclusiones o juicios diferentes a los consignados en la demanda, por lo tanto, la Sala considera que es procedente la imposición de la sanción al tenor de la normatividad tributaria y de conformidad a las glosas determinadas por la DIAN frente a la declaración privada de Renta y Complementarios correspondiente al año 2016 presentada por la sociedad FERRECASTILLO S.A.S. el 5 de mayo de 2016 y que se mantienen según lo expuesto en esta decisión.”

**FUENTE FORMAL:** Estatuto Tributario/ Ley 6 de 1992/ Ley 1314 De 009/ Ley 1607 de 2012/ Ley 1819 de 2016.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C-733 de 2003/ Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de septiembre de 2008. Expediente 2003 02203 01 (15255). M.P. Héctor J. Romero Díaz./ Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de julio de 2013. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00757-01(17422).



**DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** REVOCATORIA DIRECTA

**DEMANDANTE:** LAUREANO SECUNDINO ORTEGA Y OTROS

**DEMANDADO:** NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y OTRO

**RADICACIÓN:** 41-001-33-33-002-2016-00217-01

**FECHA:** FEBRERO -02 - DE 2021

**PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:** Detención preventiva- debieron verificarse requisitos de Ley.

“Por ello considera la Sala que en adelante y hasta tanto no se dicte sentencia de unificación, es plenamente aplicable en materia de privación injusta de la libertad lo señalado por la Corte Constitucional en la SU-072 de 2018, respecto al régimen de responsabilidad patrimonial a tener en cuenta en eventos de privación injusta de la libertad, en el sentido que como el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, así como la sentencia C-037 de 1996 que determinó su exequibilidad condicionada no señalaron un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado, debe tenerse en cuenta el



régimen de imputación preferente en materia de responsabilidad, esto es, la falla en el servicio y solo es viable aplicar el régimen objetivo del daño especial, cuando no sea suficiente para resolver una determinada situación.

Para el tribunal de cierre constitucional, no obstante corresponder al operador judicial determinar en cada caso cuál es el régimen de responsabilidad a aplicar, debe tenerse en cuenta lo señalado en la sentencia C-037 de 1996 en el sentido que la calificación injusta de la privación de la libertad, implica “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”<sup>15</sup>.

La Corte, insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”<sup>16</sup>.

Se precisa que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política en estos casos es la existencia de un daño antijurídico, que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación y que solo en dos eventos, esto es, los establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, esto es, cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, pues en las dos situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”<sup>17</sup>.

En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso, el funcionario judicial debe tener en clara la información desde un principio y, en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal<sup>18</sup>.

También refiere que en un sistema penal acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal puedan definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden establecer en la contradicción probatoria durante un juicio oral<sup>19</sup> y que lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.”

(...)

“En conclusión, las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, establece que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, pues, tales circunstancias demarcan la antijuridicidad de daño y la responsabilidad del Estado bajo un régimen subjetivo por falla en el servicio, en caso contrario se analizará bajo el régimen objetivo por daño especial cuando el hecho no ha existido o la conducta es objetivamente atípica.”

(.....)

“En virtud de lo anterior, la Sala estima que la motivación de la medida de aseguramiento proferida en contra del señor Laurencio Secundino Ortega obedeció al valor probatorio que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN otorgó a un informe sustentado en una declaración de un excombatiente que solo servía como criterio de orientación de la investigación; a la incorrecta valoración de los testimonios allegados a la misma, y a la inexistencia de pruebas que acreditaran la ocurrencia del hecho punible.”

(...)

“Como el informe soportado en la declaración del señor JOSÉ ABELARDO YUCUMA CHIMBACO constituía solo un criterio de orientación de la investigación, correspondía al fiscal haber ordenado la recepción de tal testimonio para judicializar su versión y convertirla en



medio de prueba a fin que fuera valorado al momento de resolver la situación jurídica del investigado; y como tampoco obraba dentro del expediente prueba alguna que armonizara con las declaraciones de los reinsertados y desplazados, no se vislumbran indicios que sustentaran la medida de aseguramiento contra el señor Laurencio Secundino Ortega, por lo que, se reitera, no se cumplían los requisitos que para su imposición establecía el marco procedimental penal vigente para la época de los hechos, circunstancia que sustentó la revocatoria de la medida adoptada por el juez que realizó el control de legalidad de la misma.

Por otro lado, no observa la Sala actuación de la RAMA JUDICIAL distinta a la decisión a que se acaba de hacer referencia que revocó la medida de aseguramiento y que permita adelantar estudio de responsabilidad frente a esta entidad, por lo que le asiste razón en cuanto que la detención injusta solo es imputable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tal como lo precisó la sentencia impugnada.

Además, conforme ha quedado expuesto, la vinculación del señor Laurencio Secundino Ortega a la investigación penal se encontró fundamentada en un informe de policía, sin que se vislumbre por parte de la Sala la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del aquí demandante que sugiera el análisis de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Por lo tanto, la Sala concluye, que al proferir la decisión que imponía la medida de aseguramiento al señor Laurencio Secundino Ortega, tenía la obligación de verificar que se satisficieran los requisitos formales y sustanciales para privarlo de la libertad, como ello no ocurrió, estamos ante la configuración de una falla del servicio por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tal y como lo advirtió el A quo. Por lo tanto, al no ceñirse a lo dispuesto por el ordenamiento legal, es claro que la privación de la libertad se tornó injusta y el investigado no tenía que soportarla surgiendo el deber de reparar a cargo de dicha entidad.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 270 de 1996/ Ley 600 de 2000/ Ley 599 de 2000.

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** C- 037 de 1996/ SU-072 de 2018/ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 3 de agosto de 2016. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), Rad. 25000-23-26-000-2015-00170 – 01 (35352).



**Dr. RAMIRO APONTE PINO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTE:** NEFTALÍ VARGAS SCARPETTA Y OTROS

**DEMANDADO:** MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS

**RADICACIÓN:** 41- 001- 33 -33- 002- 2012-00205-01

**FECHA:** FEBRERO 2 DE 2021.

**RESPONSABILIDAD DEL ESTADO:** Muerte motociclista deslizamiento arena y piedra en la vía.

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa<sup>9</sup>, el Estado está obligado a responder por los accidentes generados por el mal cuidado de las vías públicas, por omitir un adecuado mantenimiento o por la falta de señalización. Precizando que la responsabilidad no opera de manera automática, y que el interesado debe probar el nexo causal entre el daño sufrido y las acciones u omisiones de las entidades encargadas de la conservación de la vía pública.

Al abordar el análisis de los siniestros gestados por deslizamientos de tierra o desprendimientos de piedra, dicha Corporación<sup>10</sup> precisó que el Estado únicamente responde cuando conociendo la situación de peligro, la entidad no toma las medidas adecuadas para evitarlo.”

(...)

“c).-Teniendo en cuenta que existe identidad fáctica en los dos procesos; es menester colegir que en el asunto sub examine no se logró demostrar que la entidad accionada incurrió en la alegada falla del servicio, y que su conducta omisiva haya sido la gestora del deceso:

i).-En primer lugar, porque la prueba documental acredita que la vía donde ocurrió el accidente es de doble sentido, de dos carriles, construida en asfalto; la cual, contaba con un muro de contención que se construyó para precaver situaciones como la ocurrida.

ii).- En segundo lugar, porque en el momento del siniestro se estaban ejecutando dos contratos de conservación y mantenimiento rutinario.

iii).-Contrario a lo que coligió el a quo, la prueba pericial carece de rigurosidad y de soporte técnico y científico; lo cual, le resta credibilidad a sus conclusiones:”

(...)

“Merced a lo anterior, es menester colegir que existía señalización indicativa del riesgo de transitar por ese corredor vial; particularmente, por derrumbe y hundimiento en la vía.

v).- En cuarto lugar, porque si en gracia de discusión se acepta no existía una apropiada señalización; no se puede concluir que el desenlace fatal se hubiera evitado si la misma estuviera presente. Porque como ya se indicara, el siniestro fue ocasionado por una alud que intempestivamente impactó al señor Vargas Barrera; lo cual, no es imputable a la conducta omisiva que se endilga al Instituto Nacional de Vías.”

**FUENTE FORMAL:** Artículo 90 CP.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Expediente 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). C.P. Enrique Gil Botero/ Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de septiembre de 2014. Expediente 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro/ Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de mayo de 2012. Rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI). C.P. Susana Buitrago Valencia/Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de julio de 2015. Rad. (SU) 110010315000201400105-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Tribunal Administrativo del Huila, sentencia del 27 de octubre de 2020, expediente 41 00133 33 006 2013 00067 01. M.P. Enrique Dussán Cabrera. Tribunal Administrativo del Huila, sentencia del 29 de junio de 2018, expediente 410013333005-2013-00136-01. M.P. Jorge Alirio Cortés Soto, entre otras.



**Dr. RAMIRO APONTE PINO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** SAÚL ARRIETA TRUJILLO

**DEMANDADO:** UGPP

**RADICACIÓN:** 41001333300220160044401

**FECHA:** FEBRERO 2 DE 2021.

**RELIQUIDACIÓN PENSIONAL: Empleado Procuraduría General de la Nación**

“g.- El 11 de junio de 2020, el H. Consejo de Estado profirió sentencia de unificación<sup>29</sup> y analizó el régimen pensional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y reiteró la posición adoptada en la sentencia del 18 de agosto de 2018<sup>30</sup>, resaltando que el reconocimiento de esa prestación se subordina a las prescripciones consagradas en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971 (en cuanto a edad, tiempo y tasa de reemplazo). Sin embargo, el periodo que se debe tener en cuenta es el previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales enlistados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, y según se trate de magistrados o empleados, los creados por conducto de los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 (con la modificación del artículo 1° de Ley 332 de 1996)<sup>31</sup>, 1° del Decreto 610 de 1998<sup>32</sup>, 1° del Decreto 1102 de 2012<sup>33</sup>, 1° del Decreto 2460 de 2006<sup>34</sup>, 1° del Decreto 3900 de 2008<sup>35</sup> y 1° del Decreto 383 de 2013<sup>36</sup>; siempre que sobre ellos, se hubiesen realizado las cotizaciones respectivas: “  
(....)

“Tomando como marco de reflexión el calificado parecer jurisprudencial anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que a partir de la referida fecha al accionante le faltaban 14 años, 1 mes y 16 días para consolidar el status pensional (55 años de edad<sup>39</sup>); el IBL se debía integrar de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; es decir, con el promedio de los factores enlistados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, al igual que los creados por conducto de los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 (con la modificación del artículo 1° de Ley 332 de 1996)<sup>40</sup>, 1° del Decreto 610 de 1998<sup>41</sup>, 1° del Decreto 1102 de 2012<sup>42</sup>, 1° del Decreto 2460 de 2006<sup>43</sup>, 1° del Decreto 3900 de 2008<sup>44</sup> y 1° del Decreto 383 de 2013<sup>45</sup> (devengados durante ese lapso o durante todo el tiempo, si fuere superior).  
(....)

“Merced a lo anterior, la Sala advierte que la pensión se reconoció teniendo en cuenta la edad, el tiempo de servicio, la tasa de reemplazo, el periodo y los factores salariales consagrados en el Decreto 546 de 1971 (régimen especial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público). En tal virtud, la mesada de desmejorarla si se reliquidara con fundamento en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en el Decreto 1158 de 1954 y en los artículos 14 de

la Ley 4ª de 1992 (con la modificación del artículo 1º de Ley 332 de 1996)46, 1º del Decreto 610 de 199847, 1º del Decreto 1102 de 201248, 1º del Decreto 2460 de 200649, 1º del Decreto 3900 de 200850 y 1º del Decreto 383 de 201351 (como lo dispone el precedente jurisprudencial ya mencionado).”

**FUENTE FORMAL:** Ley 33 de 1985/ Ley 62 de 1985/Ley 100 de 1993/Decreto 1158 de 1994/ Decreto 546 de 1971/ Decreto 717 de 1978.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C-258 de 2013/ T-078 de 2014/ SU-230 de 2015/ C- 218 de 2013/ SU-395 de 2017/29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C., Once (11) de Junio de Dos Mil Veinte (2020). Radicación Número: 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17) CE-SUJ-S2-021-20. Actor: Cándida Rosa Araque de Navas. Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – (Colpensiones). Expediente 4403-2013. CP. César Palomino Cortés.



**DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** LIGIA ROJAS PEÑA Y OTROS

**DEMANDADO:** E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PITALITO

**RADICACIÓN:** 41 001 23 33- 000- 2014-00530-00

**FECHA:** FEBRERO 23 DE 2021

**RÉGIMEN CESANTÍAS SERVIDORES SECTOR SALUD NIVEL TERRITORIAL/  
Liquidación anualizada por estar afiliados al FNA.**

“Lo anterior llevo a que mediante Decreto 3118 de 1968 el Gobierno Nacional iniciara el proceso de desmonte de la retroactividad de las cesantías, pero únicamente en relación con los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, es decir, que los servidores del nivel territorial que venían gozando de la retroactividad no vieron afectado su derecho.

Posteriormente, siguiendo con el desmonte del régimen retroactivo de cesantías, se expidió la Ley 10 de 1990 señalando que, a los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales, se les aplica el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional, por lo que para la liquidación y pago de sus cesantías debía recurrirse a las prescripciones del Decreto 3118 de 1968, que prevé el modelo anualizado administrado por el FNA.

Mediante el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 se la prohibición expresa de reconocer y pactar “para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantías a ellos aplicable”, de manera que a partir de dicha norma, el sistema de liquidación anualizado se convirtió en la regla general para este tipo de empleados.

En consonancia con dicha norma, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 había estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (ramas legislativa y ejecutiva, excepto el personal uniformado de la fuerza pública), a partir de su entrada en vigencia, es decir, el 31 de diciembre de 1996; norma que fue reglamentada con el Decreto 1582 de 1998, en cuyo artículo 3 se estableció la posibilidad de que los servidores con régimen retroactivo que así lo decidieran, pudieran acogerse al régimen anualizado.

De otra parte, la Ley 432 de 1998, que introdujo modificaciones a la naturaleza jurídica y cobertura del FNA, precisó en su artículo 5° que los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público se debían afiliar al mismo, con excepción del personal uniformado de las fuerzas militares y de los docentes.

De igual forma, el artículo 19 del Decreto 1453 de 1998, reglamentario de la mencionada Ley 432, consagró la obligatoriedad de afiliación al FNA, para los servidores públicos de las ESE del orden nacional y de las sociedades de economía mixta, cuyo capital esté compuesto en más del 90% por recursos del Estado, cuya afiliación era voluntaria en el Decreto 3118 de 1968.

En cuanto a los servidores del orden territorial que ingresaron a la administración pública luego de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996 (31 de diciembre de 1996), los cobija el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad a tal fecha, pero siempre y cuando hubieren manifestado su voluntad de renunciar al sistema de retroactividad y en el artículo 2° del Decreto 1252 de 30 de junio de 2000 se conservó el régimen de cesantías retroactivas para los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000 las percibían pero solo hasta la terminación de la vinculación laboral.”

(....)

“En este aspecto y para determinar o no la retroactividad de las cesantías en el sector salud, el Consejo de Estado en sentencias del 5 de abril de 20177 y 26 de abril de 20188, señaló que a pesar de que el servidor público se haya vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 10 de 1990 en el nivel territorial, si sus cesantías fueron consignadas al FNA de manera ininterrumpida, no le asiste el derecho a la liquidación con retroactividad, pues desde su vinculación optó por el sistema de liquidación anualizado.

Además, se afirmó que, si no existe prueba que acredite la manifestación de su voluntad de acogerse a dicho sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales de sus cesantías directamente del FNA, permite inferir que el servidor conocía de su vinculación al aludido fondo y por lo tanto se acogió a las reglas y disposiciones que lo regulan y así, el criterio determinante es el hecho de que el servidor fue afiliado al FNA, independiente de la fecha de vinculación.

En caso contrario, en sentencia del 22 de marzo de 20189, se precisó que si el servidor público del sector salud del nivel territorial se vinculó antes de la Ley 10 de 1990, se afilió a un fondo privado de cesantías y además no existe prueba de que haya solicitado el cambio de régimen, debe aplicársele lo señalado en las Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, al igual que el Decreto 1110 de 1947, es decir, el régimen de retroactividad de cesantías. En este evento, se aplicó como factor o elemento determinante la fecha en que fue vinculado y su afiliación a un fondo privado.

Así las cosas, se concluye que los servidores públicos del sector salud del nivel territorial, que se hayan vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 10 de 1990 (10 de enero), por regla general, son beneficiarios en materia de cesantías del régimen de retroactividad siempre y cuando no se encuentren afiliados al FNA, pues como ya se indicó, con la afiliación a este fondo se entiende que pertenecen al régimen de anualidad.”  
(....)

“Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de lo expuesto en el acápite precedente, concluye la Sala que a los demandantes no les asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías conforme al régimen retroactivo, toda vez que mientras estuvo vigente su vinculación (en el caso de los que se retiraron) y los que continúan laborando, fueron y permanecen afiliados al FNA por mandato legal recibiendo el pago anualizado de sus cesantías.

No puede olvidarse que desde su creación en 1968, al FNA debieron afiliarse todo los servidores públicos nacionales y tal calidad la tenían los aquí demandantes, pues se hallaban vinculadas al servicio seccional de salud y, por ende, les asistía el deber de afiliarse a dicho fondo, sin que fuese necesario la existencia de consentimiento alguno, como quiera que ello operaba por ministerio de la ley, es decir, se trataba de una disposición de obligatorio acatamiento.

En esa medida, el Tribunal no avista que los actos administrativos demandados hayan conculcado la normativa invocada en la demanda, luego no se acoge la censura hecha contra los mismos, sino que se acogen los planteamientos de la entidad demandada y en tal virtud, las pretensiones no están llamadas a prosperar y habrán de negarse.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 6 de 1943/ Ley 65 de 1946/Ley 432 de 1998/Ley 10 de 1990/ Decreto 2767 de 1945/ Decreto 1160 de 1947/ Decreto 3118 de 1968/Decreto 306 de 2004.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C-687 de 1996/ Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, exp.: 2013-00135. / Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp.: 2015-00041. / Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp.: 2014-00210.



**DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTE:** FERNEY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

**DEMANDADO:** MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE- CUERPO DE BOMBEROS

**RADICACIÓN:** 41 -001- 33- 33- 1004- 2010—00494- 03

**FECHA:** FEBRERO 02 DE 2021

**RESPONSABILIDAD MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE: Falta de atención y prevención de incendios.**

“Encuentran el Tribunal que los deponentes relataron espontáneamente la ciencia de su dicho al haber sido testigos presenciales de los hechos y al corresponder su relato con la prueba documental arrimada en lo referente al lugar donde se originó la conflagración, la comparecencia y atención dada a la emergencia por los bomberos y las dificultades que presentaron los mismos en el desarrollo de su labor, por eso la Corporación da pleno valor probatorio a su dicho.

De lo anterior emerge que la falla del servicio endilgada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campoalegre, consistente en no haber asistido la emergencia relacionada con el incendio no fue demostrada, por el contrario, se acreditó que dicho cuerpo bomberil a pesar de haber suspendido los turnos de guardia por no contar con los recursos para su funcionamiento y tener la máquina de bomberos fuera de funcionamiento, atendió el llamado de emergencia y compareció al lugar de los hechos con el personal humano y recursos disponibles pidiendo apoyo a sus colegas de los municipios vecinos, sin evidenciar la Corporación que su actuar constituya causa determinante en el daño cuya reparación se pretende

y más cuando se evidencia que no tuvo el apoyo del ente territorial a pesar de los oficios y comunicaciones que le remitieron por las falencias señaladas.

No ocurre lo mismo respecto del municipio de Campoalegre, quien incumplió su obligación de garantizar el servicio público de prevención y control de incendios en su territorio, pues como omitió efectuar a tiempo las reparaciones y mantenimiento respectivo a la máquina de bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios pues se abstuvo de girar los recursos correspondientes para el adecuado funcionamiento de la institución bomberil y solamente después del suceso se presentaron las autoridades del CLOPAD, ello conllevó a que la emergencia presentada el 20 de diciembre de 2008 en dicha municipalidad no fuera atendida en debida forma y constituya una de las causas del daño cuya reparación pretende el actor, al respecto el precedente ha indicado:

“Así las cosas, cabe resaltar que la prestación razonable del servicio estudiado exige el correcto y diligente funcionamiento de sus distintos componentes básicos, esto es, que las máquinas de bomberos tengan un mantenimiento adecuado, que quienes las manejan estén capacitados para utilizarlas, que se mantengan las reservas de agua necesarias para acudir a las emergencias de inmediato y contrarrestarlas en debida forma, y, además, que cuenten con un equipamiento completo y en buen estado, tales como extinguidores, hachas, entre otras herramientas. Bajo esta perspectiva, forzoso es concluir que en el presente caso se



estructuró una falla en la prestación del servicio público de prevención y control de incendios, el cual –se repite–, radica en cabeza del alcalde municipal.”<sup>12</sup>

Obsérvese que el municipio de Campoalegre no demostró haber realizado la inversión y gestión necesaria para el correcto funcionamiento del servicio bomberil, pues si bien aportó el contrato No. 222 de diciembre 10 de 2008 suscrito con el objeto del suministro de repuestos necesarios para el mantenimiento de la máquina de bomberos (f. 315 a 318), el mismo pone de relieve la tardanza en que incurrió el ente territorial en atender las reparaciones requeridas por dicha máquina que fueron solicitadas por el Comandante de Bomberos desde el 11 de junio de 2008 (f. 115) (casi 6 meses) y de todas maneras no fue suficiente para que el 20 de diciembre de 2008 en que ocurrió el incendio el carro de bomberos funcionara correctamente.

Asimismo, el municipio de Campoalegre allegó el contrato interadministrativo No. 142 de septiembre 18 de 2008 suscrito con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios con el objeto de transferir a éste los recursos recaudados en aplicación del Acuerdo 006 de 2005 que adoptó el estatuto de prevención de incendios, por valor de \$3'202.340 (f. 324 a 326), no obstante considera el Tribunal que dicho convenio no es prueba del pago efectivo de dicha suma, máxime cuando la representante legal del Cuerpo Bomberil en su declaración adujo que para la época de los hechos la suspensión de turnos de guardia se mantenía, por el incumplimiento en los pagos a cargo del municipio y no contar con recursos para remunerar las unidades activas (f. 423 a 425), por lo que el referido contrato interadministrativo no constituye prueba exculpatoria de la omisión reprochada en esta oportunidad al ente territorial demandado.

En suma, la causa jurídica del daño e imputabilidad está en parte por la falla del servicio en que incurrió el municipio de Campoalegre al omitir garantizar, en debida forma, la prestación del servicio de prevención y atención de incendios a su cargo, siendo ello el hilo conductor del daño antijurídico y la imputabilidad, sin resultar admisible la aplicación del título de imputación del daño especial como refirió el a quo, pues en el presente asunto la afectación reclamada por el actor no fue producto de un actuar legítimo del Estado que genere un desequilibrio en las cargas públicas<sup>13</sup>.

Sin embargo, como inicialmente se observara el representante legal del restaurante “Casa China” y el demandante no acataron las recomendaciones dadas por los bomberos antes del insuceso, consistentes en el cambio de redes eléctricas e instalaciones de gas, por lo que al haberse ocasionado el incendio en el establecimiento mencionado por causa de un corto circuito, estima el Tribunal que fue esa fue la causa determinante del incendio y por ende participaron activamente en la causación del daño aquí reclamado, estimando la Sala en un setenta por ciento (70%) tal culpa o participación y en esa medida la condena que corresponda al municipio demandado se reducirá a un treinta por ciento (39%).

Es que si el actor y el tercero hubieran atendido las previsiones del cuerpo de bomberos seguramente no se habría producido el corto circuito e incendio que se constituyó en la causa del daño y de todas maneras para atender la emergencia se pidió apoyo a los cuerpos bomberiles vecinos quienes acudieron al llamado y controlaron la conflagración, por eso habrá de reducirse la condena en la forma antes mencionada.

Por lo expuesto, se adicionará la sentencia recurrida para declarar parcialmente probadas las excepciones de rompimiento y/o inexistencia del nexo causal y el hecho de un tercero propuestas por el municipio de Campoalegre, confirmándola en cuanto declaró la responsabilidad del mismo por el daño ocasionado al actor en virtud de la falta de atención y prevención de incendios.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 90/ 311 y 365 CP/ Ley 136 de 1994 / Ley 322 de 1992/ Decreto 1333 de 1986.

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas sentencias citadas en esta decisión:** Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 11001-03-15- 000-2011-01378-00(PI), CP: Susana Buitrago Valencia/Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C, sentencia de octubre 28 de 2019, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, Rad. 20001-23-31-0002009-00353-01(45396)/ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), CP. Enrique Gil Botero./Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C, sentencia de abril 23 de 2020, Rad. 68001-23-31-000-2003-01757-01(48206).



**Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD ELECTORAL

**DEMANDANTE:** GUILLERMO LEIVA AGUIRRE

**DEMANDADO:** CARLOS ALBERTO MURCIA MÉNDEZ

**RADICACIÓN:** 41-001- 23- 33 -000- 2019- 00548- 00

**FECHA:** FEBRERO 12 DE 2021

**ELECCIÓN ALCALDE MUNICIPAL:** Compra de votos a electores para obtener resultados favorables.

“Se tiene así que de las 479 inscripciones de cédulas para participar en los comicios electorales que se llevaron a cabo en el municipio de El Agrado el 27 de octubre de 2019, que no fueron dejadas sin efectos por el Consejo Nacional Electoral, a través del procedimiento breve y sumario establecido por el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, la parte demandante no logró acreditar que dichas personas no residen ni tienen vínculo alguno con el municipio de El Agrado.

En consecuencia, al no acreditarse el primer requisito, resulta inocuo proceder al estudio de los restantes, esto es, que quienes inscribieron su cédula votaron de manera efectiva en las elecciones y que sus votos tuvieron incidencia en el resultado electoral.”

(...)

“Teniendo en cuenta el anterior material probatorio, pudo establecer la Sala el actuar del señor CARLOS ALBERTO MURCIA MÉNDEZ de manera previa y posterior a los comicios electorales para autoridades territoriales que se realizó el 27 de octubre de 2019 y en cual salió electo como Alcalde del Municipio de El Agrado-Huila, para el período 2020-2023, ofreciendo, comprometiéndose y coordinando la entrega de favores, dádivas, dinero en efectivo, a cambio de obtener el voto a su favor, todo ello, con la ayuda de la administración municipal saliente.

Estableciéndose así entre dichos favores la entrega de bultos de cemento, hojas de zinc, mercados, anquetas, arenilla, volquetas de arena, kits para moto taxistas, mejoramiento

de vivienda, entrega de material sanitario, mejoramiento de carreteras, entrega de lotes, préstamo de maquinaria, dinero para el pago de recibos públicos, dineros en efectivo que denominaba “cariñitos”, transporte de los votantes el día de las elecciones, etc.

Proceder con el cual persuadió a las personas para que votaran a su favor, afectando así la libertad del voto y el carácter secreto del derecho al voto, lo que permite concluir que personas no votaron a conciencia y de manera libre, sino que comprometidos de manera previa con el demandado, por los favores y dádivas que de manera directa se comprometía, coordinaba y entregaba.

De tal manera que, el ofrecimiento y posterior entrega de dinero y otros elementos que adelantó el demandado para obtener el voto de los residentes del Municipio de El Agrado, resulta ser contrario a los principios democráticos que rigen el Estado colombiano, resultando ser totalmente objeto de reproche para el máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que quien pretende ser el representante legal de un municipio, procediera a comprar literalmente el voto de los electores para obtener resultados favorables en las urnas, como finalmente aconteció, afectando así los principios de transparencia, la igualdad y la legitimidad democrática, y los principios que subyacen de esta, como lo son los principios pro hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores).

En este punto, resulta importante traer a colación lo manifestado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el sentido que para garantizar los postulados de la democracia participativa los representantes del pueblo deben ser elegidos legítimamente en las urnas, es totalmente reprochable la acreditación de la conducta

desplegada en contra de la libertad y el secreto del voto por el candidato directamente o con su anuencia, como la realización de prácticas corruptas como la compra de votos en dinero o en especie.”  
(.....)

“Con fundamento en lo previamente expuesto, encuentra la Sala configurada la causal de nulidad consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 de violación de las normas en que debía fundarse, específicamente los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política y la realización de prácticas corruptas para la compra de los votos de los electores del municipio de El Agrado, razón por la cual se ha de declarar la nulidad de la elección como Alcalde del Municipio de El Agrado del señor CARLOS ALBERTO MURCIA MÉNDEZ para el período 2020-2023.

Si bien se señala por el apoderado del señor CARLOS ALBERTO MURCIA MÉNDEZ que su poderdante se encuentra cobijado por el principio de presunción de inocencia por cuanto el proceso penal no ha concluido y no se ha definido la culpabilidad en la comisión de los delitos punibles que se le imputan, resulta importante precisar que el medio de control de nulidad electoral y el proceso penal, son independientes entre sí, y la decisión que se adopte en uno de ellos no tiene incidencia en los otros.

Así, la acción penal tiene como objeto la investigación y sanción de las conductas punibles que resulten ser típicas, antijurídicas y culpables que se pongan en su conocimiento, mientras el medio de control de nulidad electoral, se dirige al estudio de legalidad de los actos de elección, nombramiento o llamamiento, en pro del mantenimiento y preservación del ordenamiento jurídico democrático colombiano y la decisión en caso de acreditarse los elementos de la causal que se endilga con independencia que la misma se haya cometido con dolo o culpa, se limita a la expulsión del acto electoral, sin que conlleve una inhabilidad para el afectado.

Así mismo, ha dicho la Sección Quinta<sup>21</sup> del Consejo de Estado, que no resulta procedente la aplicación de la figura de la prejudicialidad, por cuanto las decisiones que se adopten en uno u otro proceso no influyen en los demás, lo cual no impide que el material probatorio de uno se pueda trasladar a otro, y puedan ser objeto de análisis y valoración para la toma de la decisión final, como efectivamente tuvo ocurrencia en el asunto sub examine.”  
(....)

“En consecuencia, como quiera que la declaratoria de nulidad por su elección es una falta absoluta del alcalde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9824 de la Ley 136 de 1994, y al faltar más de dieciocho (18) meses para la terminación del periodo, se ordenará la realización de nuevas elecciones para elegir Alcalde del Municipio de El Agrado para el tiempo que resta para el periodo 2020-2023, razón por la cual se comunicará la presente decisión al Gobernador del Departamento del Huila, al Consejo Nacional Electoral y al Señor Registrador Nacional del Estado Civil, para que adelanten los trámites pertinente para la realización de nuevas elecciones.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 316 CP/ CPACA/Ley 136 de 1994/

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. dieciséis (16) mayo de dos mil diecinueve (2019) referencia: nulidad electoral radicación: 11001-03-28-000-2018-00084-00 demandante: procuraduría general de la nación demandado: Aida Merlano Rebolledo/ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 9 de noviembre de 2000. Radicación número 2424. Consejero ponente: Darío Quiñones Pinilla. Actor: Sócrates de Jesús Mosquera Torres y Jhon Jairo Mosquera. Demandado: alcalde del municipio del Medio Baudo.



**Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTE:** YILBERTO CEDIEL HERNÁNDEZ

**DEMANDADO:** NACIÓN- MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL

**RADICACIÓN:** 41-001- 33- 33 -003- 2014- 00032-

**FECHA:** FEBRERO 5 DE 2021

**RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Lesiones sufridas por particular en  
procedimiento policía Nacional.**

“En efecto, como lo advirtiera el a quo, si bien se encuentra acreditado que el accionante al momento del procedimiento realizado por la Policía Nacional se encontraba en un establecimiento nocturno ingiriendo bebidas alcohólicas, con una posterior determinación clínica de su estado de embriaguez, no se probó que éste hubiese ejercido acciones violentas contra algunos de los uniformados que participaron del procedimiento de requisa.

Es así, que no se aportaron elementos de prueba del supuesto ingreso a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón (Huila) del Patrullero Oliveros que presuntamente agredió el accionante antes de lanzarse del vehículo donde lo transportaban. Es de anotar que, de dicho patrullero solo se conoce por medio de la declaración del Agente Eduard Edilberto Zubieta Gutiérrez, que fue trasladado a otra ciudad, sin que obre una declaración de Oliveros dentro de la investigación penal militar, que corrobore lo afirmado por el agente en mención, ni la prueba fue solicitada por la demandada.

En este mismo sentido, tampoco la navaja que presuntamente le fue decomisada y con la que se alega agredió al personal policial, como se alude en las declaraciones de los uniformados.

Por el contrario, según la declaración rendida por la señora Esperanza Murcia Sierra dentro del proceso adelantado por el Juzgado 151 Penal Militar, si da cuenta que desde que el señor Cediél iba a ser subido al respectivo camión, el personal policial lo venía agrediendo de manera verbal, pese al llamado de las personas que se encontraban en el lugar.

Pero echa de menos, elementos de prueba que permitan corroborar los dichos de los uniformados frente a los hechos ocurridos con posterioridad al momento de la retención del Señor Cediél, pues como lo refiere el intendente Luis Eduardo Calderón Lugo “Desconoce si hubo testigos de tal procedimiento aparte de los policías y el accionante”.

Se suma a las características de las lesiones que fueron diagnosticadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como causadas por un mecanismo contundente, diferentes a las lesiones ocasionadas por la caída del automotor o de haber saltado de él; el hecho de ser conducido por un grupo de uniformados en un vehículo destinado para tal efecto. Uniformados que están capacitados para llevar a cabo este tipo de procedimientos, lo que les permite valorar los riesgos propios de trasladar a una persona a la que se le ha restringido su libertad, así sea transitoriamente, y desde luego la factibilidad de un intento de fuga, pudiendo anticiparse y mitigar tal riesgo.

Ahora bien, si en gracia de discusión se contara con elementos de juicio que permitieran acreditar en grado de certeza, que el demandante en efecto saltó del vehículo, tal hecho, no escaparía de la órbita de responsabilidad que del Estado por los daños ocasionados a las personas a quienes se les restringe su libertad, en virtud de las relaciones especiales de sujeción existentes entre ellas y la Administración, pues para el Estado surge una obligación de protección y seguridad respecto de aquellas<sup>38</sup>, obligaciones que claramente debían comprender una idónea elección del transporte en el cual se iba a trasladar el detenido, previendo precisamente la posibilidad de una fuga o salvaguardar su integridad física y la de los uniformados.

6.8.5. Así las cosas, teniendo como hecho indicadores, lo expuesto por el padre del accionante al momento de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación de Garzón, sumado a que las lesiones causadas a éste fueron provocadas por un mecanismo contundente, la Sala coincide con al A quo al no encontrar algún grado de certeza en el argumento expuesto por la entidad accionada en el sentido que las mismas fueron causadas por el salto y la caída del vehículo en el que era trasladado al Comando de la Policía de Garzón, en el que venía custodiado por un grupo de uniformados, bajo el efecto del alcohol, la distancia entre el Comando y el sitio donde realizaron la requisa, la gravedad de las lesiones, conforme a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se puede concluir que las lesiones causadas no fueron producto de la caída de referido vehículo, sino que fueron provocadas por el excesivo uso de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional, vulnerando de esta manera los principios de proporcionalidad y necesidad que gobiernan los procedimientos de la Fuerza Pública; el cual es legítimo siempre y cuando se hubiesen agotado otros medios que la situación permitía.

Adicionalmente, se desconocieron los artículos 4, 29 y 30 del Código Nacional de Policía<sup>39</sup>, que imponen emplear los medios autorizados que causen el menor daño posible a la integridad de las personas y de sus bienes.

De otro lado, en gracia de discusión si se aceptara que el señor Yilberto Cediél Hernández en efecto se arrojó desde el vehículo, también existiría responsabilidad de la entidad demandada, pues el señor Cediél Hernández se hallaba a cargo de los uniformados, con lo que se entendería que el automotor en el que lo trasladaron no contaba con las debidas seguridades para trasladar a la persona retenida transitoriamente.

Así, la irregularidad se evidencia en el incumplimiento de las obligaciones de respetar los Derechos Humanos establecidos en los tratados ratificados voluntariamente por el Congreso de la República y por la normativa interna; garantizar su goce y pleno ejercicio a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, pues se

repudió la norma constitucional más básica para la pacífica convivencia en el territorio nacional, consignada en el artículo 2° de la Constitución Política, de acuerdo con la cual, las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, por lo que se confirmará la sentencia impugnada.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 2 CP/ Art. 4, 29 y 30 CNP.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón, radicado: 760012331000200701298 01/35 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de abril de 2018; Exp. 20750.



**Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS**  
**MAGISTRADA PONENTE**

**ACCIÓN:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTE:** VICTOR MANUEL CHAMBO MURCIA Y OTROS

**DEMANDADO:** NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL

**RADICACIÓN:** 41-0013- 33- 33 -007- 2017- 000341- 00

**FECHA:** FEBRERO 02 DE 2021

**PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:** No se excedió injustamente la medida de aseguramiento:

“En conclusión, las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, establece que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, pues, tales circunstancias demarcan la antijuridicidad de daño y la responsabilidad del Estado bajo un régimen subjetivo por falla en el servicio, en caso contrario se analizará bajo el



régimen objetivo por daño especial cuando el hecho no ha existido o la conducta es objetivamente atípica.”  
(....)

“De lo anterior, es dable concluir que para el caso en concreto, el Juez de Garantías a partir de los elementos materiales probatorios, que le fueran aportados, entre estos, la denuncia formulada por la señora Delcy Cortes Bolaños; las versiones de los señores Jhon Ferney Mosquera (Víctima directa), Wilson Ortiz Cortes, Luis Fernando Gómez, Ana María González, Maicol Steven Ortiz Cortes (Víctima directa), Miguel Ángel Hurtado (testigo presencial), Jhonny Alexander Giraldo, y Francisco Ninco Cedeño; los informes de inspección a campo; reconocimiento fotográfico y los Informes ejecutivos, pudo establecer que el señor Víctor Manuel Chambo Murcia frecuentaba la zona del lugar de los hechos, realizando varios hostigamientos y amenazas en contra de la señora Delcy Cortes Bolaños y su familia, y que el día de los hechos, después de que existiere la amenaza por parte de los procesados respecto (incluso el señor Víctor Manuel Chambo Murcia) de lanzar la granada y amenazarlos de muerte, el señor Víctor Manuel Chambo Murcia se encontraba dentro del taxi, cuando uno de sus ocupantes se bajó y lanzó el artefacto explosivo a la casa de habitación ubicada en la calle 80 A 1G -02 Barrio la Pradera, lugar donde residía la denunciante y su familia.

Sobre este último punto, para que la Fiscalía realizara la imputación de cargos y solicitara la medida restrictiva de la libertad en contra del señor Víctor Manuel Chambo Murcia, mediaba la declaración del señor Miguel Ángel Hurtado Rojas, quien conforme lo narrado en su declaración inicial logró observar al señor Víctor Chambo Murcia - alias “Barbas” como uno de los ocupantes del taxi, del cual descendió alias “coco” y arrojó el artefacto explosivo a la altura del inmueble ubicado en la calle 80ª No. 1G-02 Barrio la Pradera; de igual forma, con el reconocimiento fotográfico que realizó el investigador Luis Lozano Floriano, en el que el testigo Miguel Ángel Hurtado Rojas hizo el reconocimiento del Víctor Manuel Chambo Murcia como alias “El barbado”, y que en efecto había sido avizorado en lugar de los hechos el día en que se lanzó la granada.

De ahí que, para la Sala, los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas permitían inferir, según lo refirió el Juez de Garantías, que el señor Víctor Manuel Chambo Murcia se hallaba inmerso como coautor de las conductas punibles de Terrorismo, Homicidio Agravado, Trafico y Porte de Armas, Municiones de Uso Restringido, de Uso Privativo de las Fuerzas Armadas, y Daño en Bien Ajeno. También que, atendiendo a la naturaleza del delito –investigable de oficio, y con pena privativa de la libertad que supera los cuatro años de prisión – que se cumplían los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento y, por lo tanto, estableció no solo la legalidad de la captura, sino la necesidad de imponer la medida de aseguramiento consistente en detención intramural.

2.3.4.3.7. En efecto, de la argumentación del Juez de Control de Garantías para imponer la medida de aseguramiento, se puede establecer que en aquella oportunidad este tuvo por acreditados cada uno de los presupuestos que establece el artículo 308 del Código de Procedimiento penal, en cuanto la consideró además necesaria por el hecho de proteger a la comunidad, evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la comparecencia al proceso; además, la encontró como adecuada porque los hechos guardan relación con las conductas punibles, ya que dada la gravedad de los delitos el Estado debe reprimirlos, y su legalidad, por cuanto la ley establece que conforme a la comisión de estos delitos procede la limitación de la libertad en establecimiento carcelario.

“2.3.4.3.8. Así las cosas, para la Sala, tanto la captura como la imposición de la medida de aseguramiento impuesta al señor Víctor Manuel Chambo Murcia se

hallaban normativamente justificada al momento de adoptarse, teniendo en cuenta que en el sistema penal acusatorio la valoración de los elementos probatorios y evidencias físicas en esta etapa es distinta a la que corresponde al momento de proferirse sentencia (juicio oral), con lo que no puede establecerse que la entidad demandada haya incurrido en falla en el servicio.

En ese orden, la Fiscalía General de la Nación en la audiencia preliminar sustentó por medio de los elementos materiales probatorios, la imputación y la necesidad de imponer la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. Además, la parte afectada no discutió en la instancia procesal correspondiente la medida adoptada a través de los recursos legales dispuestos para ello, por el contrario, mencionó que no podía controvertir todo el material de prueba allegado por el ente acusador, por lo que pudo inferirse razonablemente la necesidad de imponer la medida de aseguramiento.”

(....)

“2.3.4.3.10. En el presente asunto la decisión absolutoria en favor del señor Víctor Manuel Chambo Murcia no tuvo su génesis en la inexistencia de la conducta delictiva o por su atipicidad, sino en que de los medios de prueba aportados no pudo tenerse la certeza más allá de toda duda razonable de la responsabilidad del acusado, pues, se restó credibilidad a la declaración del señor Miguel Ángel Hurtado Rojas, quien refirió haber visto al señor Víctor Manuel Chambo Murcia el día de los hechos dentro del taxi del cual descendió la persona que arrojó el artefacto explosivo, al señalar que resultaba contradictorio su señalamiento con lo manifestado por la víctima Maicol Steven Ortiz Cortes quien a pesar de hallarse más cerca no lo observó en el vehículo y por ello según lo refirió el fallador no pudo identificarse en el lugar de los hechos.

De ahí que la absolución no devino de la inexistencia del hecho delictivo o porque la conducta fuera atípica, pues el soporte de la sentencia absolutoria fue que las pruebas aportadas no conducían a establecer con grado de certeza la responsabilidad al señor Víctor Manuel Chambo Murcia. Ello debido a que se restaba credibilidad a la declaración del testigo Miguel Ángel Hurtado Rojas y, finalmente, la víctima directa Maicol Steven Ortiz Cortes no pudo identificar a todos los ocupantes del vehículo taxi, medio en el cual se movilizaban las personas que cometieron los delitos. De igual forma, en el juicio y en audiencia de pruebas la defensa allegó varios testigos quienes manifestaron que el día de los hechos, el señor Víctor Manuel Chambo Murcia se encontraba departiendo con unos amigos cerca al sector donde ocurrió la detonación de la granada.

De lo narrado con antelación, se traduce que la decisión penal absolutoria y la presunción de inocencia del aquí demandante no se desvirtuó por inexistencia del hecho ni por atipicidad objetiva de la conducta, sino porque del material de prueba allegado no pudo endilgarse con grado de certeza responsabilidad en la comisión de los delitos. Por lo tanto, en el presente asunto no se puede señalar que el asunto deba analizarse bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

Sin embargo, tampoco se evidencia, partiendo de lo ya reseñado la configuración de la existencia de un daño especial, esto es que el aquí demandante haya soportado una carga mayor a la de los demás ciudadanos, pues no se demostró dentro del proceso que se haya excedido injustamente los plazos permitidos por el legislador para imponer la medida de aseguramiento o para mantener vigente la misma, ello teniendo en cuenta que si bien permaneció privado de la libertad por más de tres años, lo cierto es que del material de prueba<sup>24</sup> se observa que el abogado defensor presentó solicitud de libertad por vencimiento de términos, en audiencia del 11 del julio de 2014. No obstante, el Juez Tercero Penal Municipal Con Función de Control de Garantías negó la solicitud con fundamento en que el abogado defensor no demostró que el plazo que ha transcurrido en el proceso penal No.41001-6000-000- 2012-00096 haya sido irrazonable o desproporcionado, conforme lo ha considerado la sentencia del 30 de abril 2014, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (36046); de igual forma, mencionó que revisada la actuación entre las fechas del juicio oral, el preacuerdo preparatorio y su solicitud de aplazamiento por parte de la defensa, no ha superado ni quiera 1 año, y finalmente, el delito de terrorismo tiene una pena máxima de 25 años de prisión, por lo que comparado con la proporcionalidad y la presunción de inocencia no encontró que se haya prolongado de manera injusta la privación de libertad del señor Víctor Manuel Chambo Murcia, decisión que no fue controvertida por la defensa. Motivos para no endilgar responsabilidad patrimonial al Estado y por estas razones, deberá revocarse la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda”

**FUENTE FORMAL:** Art. 90 CP/ Ley 906 de 2004/ Ley 1153 de 2011/ Ley 270 de 1996.

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** SU-072 de 2018/ C.0287 de 1996/17 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Expediente Número 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25022).



**Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS**

## **MAGISTRADA PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** SIXTO ALFONSO ROA BERMÚDEZ

**DEMANDADO:** CASUR

**RADICACIÓN:** 41-001- 33- 33 -008- 2018- 00397- 01

**FECHA:** FEBRERO 19 DE 2021.

### **ASIGNACIÓN DE RETIRO MIEMBRO POLICÍA NACIONAL: Subsidio familiar como factor salarial a liquidar.**

“Posteriormente se profirió el Decreto 4433 que en su artículo 23, indicó las partidas computables para efectos de liquidar la asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de sobrevivencia del personal de la Policía Nacional. Así, en el numeral 23.2, contempla aquellos factores sobre los que se les liquidarán dichas prestaciones a los miembros del Nivel Ejecutivo de la Institución, esto es: (i) sueldo básico, (ii) prima de retorno a la experiencia, (iii) subsidio de alimentación, (iv) duodécima parte de las primas de servicio, vacaciones y navidad. De tal forma, que se excluyeron expresamente para tales efectos, la prima del nivel ejecutivo y el subsidio familiar.

En consonancia, el artículo 26 ibídem señala que el personal de la Policía Nacional aportará mensualmente a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional un 4.75% sobre las partidas contempladas en el artículo 23 de dicho decreto.”

(...)

Ahora bien, en lo que respecta al argumento del actor en donde señala que existe una discriminación o una vulneración del derecho a la igualdad, observa la Sala que toda vez que la aplicación del Decreto 1091 de 1995 deviene de su situación legal y reglamentaria de servicio público con vinculación en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, no puede predicarse desigualdad frente a los otros miembros del nivel ejecutivo o incluso de la institución, máxime cuando esto tienen unas condiciones fácticas diferentes a las planteadas por el actor.

Al respecto el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 9 de Febrero de 2015, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación Número: 17001-23-33-000-2012-00152-01(2987-13) ya se había pronunciado sobre el presunto desmejoramiento de la situación salarial y prestacional del personal activo que ingresó al Nivel Ejecutivo, así: El citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio [en este caso, el de Agentes - Decreto 1213 de 1990, por un lado; y, el del Nivel Ejecutivo - Decreto 1091 de 1995, por el otro]. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad [ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa], la favorabilidad del Nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable [la contenida en el Decreto 1091 de 1995] existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de Agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual, en su conjunto, su condición de integrante de Nivel Ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales”.

Cabe recordar tal como quedó expuesto en precedencia, que, en materia del ajuste de la asignación de retiro, las partidas computables para liquidar las asignaciones de retiro de los miembros del nivel ejecutivo están determinadas en el artículo 23, numeral 23.2 del Decreto 4433 de 2004.

Lo anterior significa que las partidas señaladas en la norma deben ser aplicadas a los miembros del nivel ejecutivo, los cuales tienen bases salariales diferentes, primas, subsidios, bonificaciones y otros emolumentos propios, que el de los suboficiales, factores salariales establecidos en el Decreto 1212 de 1990, por lo

que no puede el demandante pretender, que se le aplique las partidas de un régimen (el de suboficiales) para liquidar la prestación de retiro de quien pertenece a otro (el del nivel ejecutivo), pues va en contravía del principio de inescindibilidad normativa.

Finalmente, destaca la Sala que el demandante ingresó a la vida policial acogiéndose al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y, con ello, quedó sometido a las normas que se profirieran en material salarial y prestacional en desarrollo de esa carrera y son las que la entidad demanda aplicó en la liquidación de la asignación de retiro del actor.”

**FUENTE FORMAL:** CP Art. 218/ Ley 4 de 1992/ Ley 62 de 1993/ Decreto 1212 y 1213 de 1990/ Decreto 041 de 1994/ Decreto 132 de 1995 / Decreto 1091 de 1995/ Decreto 1791 de 2000.

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas sentencias citadas en esta decisión:** C-417 de 1994/ C- 691 de 2003/15Consejo de Estado en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013, proferida dentro del expediente 25022, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.

## NOTA DE ADVERTENCIA

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado con los textos originales ubicados en la Secretaría del **Tribunal Administrativo del Huila**.

## CONTÁCTENOS



**María Piedad Vásquez Borrero**

**Relatora**

**Tel. 8722638**

**Palacio de Justicia Neiva- Huila**

**Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108**

**Email: [relatoriatah@gmail.com](mailto:relatoriatah@gmail.com)**

**[www.ramajudicialdelhuila.gov.co](http://www.ramajudicialdelhuila.gov.co)**

